



| | |
|--------------------|--|
| REF: | CONSULTA INCIDENTE DE DESACATO |
| RAD. INTERNO: | 2024-00005 |
| JUZGADO DE ORIGEN: | JUZGADO TERCERO PROMISCOU MUNICIPAL ORALIDAD DE SABANALARGA ATLANTICO |
| RAD. UNICO: | 08638408900320240000302 |
| ACCIONANTE: | MARTHA CECILIA VARELA MATTOS, MARÍA DEL PILAR JULIO GÓMEZ, JUAN CAMILO AHUMADA RODRÍGUEZ, JULIANA LOZANO LÓPEZ, IVETH LUCÍA AHUMADA CERVANTES, OLINDA MERCEDES SARMIENTO BERDUGO, ANA JUSTINA GARCÍA REYES, GINA PAOLA PEÑA BLANCO Y JORGE LUIS PÁEZ SERJE |
| ACCIONADO: | ALCALDE MUNICIPAL DE SABANALARGA ATLANTICO Dr. JOSÉ ELÍAS CHAMS CHAMS |

INFORME SECRETARIAL. Señora Juez, a su despacho el expediente de la referencia, el cual nos correspondió por reparto, previa revisión del correo electrónico del juzgado, a fin de constatar que la totalidad de la correspondencia está integrada a la carpeta digital. De igual manera, se encuentran organizadas las piezas procesales y actualizado el respectivo índice.

Sabanalarga, Atlántico, ocho (8) de marzo de Dos Mil Veinticuatro (2024).

El secretario,


ROBERTO CARLOS ARIZA MONTERO

Juzgado Primero Civil Del Circuito De Sabanalarga, Atlántico, ocho (8) de marzo de Dos Mil Veinticuatro (2024)

CUESTION POR DECIDIR

Procede este despacho dentro del término legal a decidir la Consulta de la sanción impuesta el 29 de febrero de 2024, proferida por el Juzgado Tercero Promiscuo Municipal Oralidad de Sabanalarga Atlántico, dentro del Incidente de Desacato de la referencia, con ocasión de la Acción de Tutela promovida por MARTHA CECILIA VARELA MATTOS, MARÍA DEL PILAR JULIO GÓMEZ, JUAN CAMILO AHUMADA RODRÍGUEZ, JULIANA LOZANO LÓPEZ, IVETH LUCÍA AHUMADA CERVANTES, OLINDA MERCEDES SARMIENTO BERDUGO, ANA JUSTINA GARCÍA REYES, GINA PAOLA PEÑA BLANCO Y JORGE LUIS PÁEZ SERJE contra el ALCALDE MUNICIPAL DE SABANALARGA ATLANTICO Dr. JOSÉ ELÍAS CHAMS CHAMS.

REF: CONSULTA INCIDENTE DE DESACATO
RAD. INTERNO: 2024-00005
JUZGADO DE ORIGEN: JUZGADO TERCERO PROMISCOO MUNICIPAL ORALIDAD DE SABANALARGA ATLANTICO
RAD. UNICO: 08638408900320240000302
ACCIONANTE: MARTHA CECILIA VARELA MATTOS, MARÍA DEL PILAR JULIO GÓMEZ, JUAN CAMILO AHUMADA RODRÍGUEZ, JULIANA LOZANO LÓPEZ, IVETH LUCÍA AHUMADA CERVANTES, OLINDA MERCEDES SARMIENTO BERDUGO, ANA JUSTINA GARCÍA REYES, GINA PAOLA PEÑA BLANCO Y JORGE LUIS PÁEZ SERJE
ACCIONADO: ALCALDE MUNICIPAL DE SABANALARGA ATLANTICO Dr. JOSÉ ELÍAS CHAMS CHAMS

ANTECEDENTES

El Juzgado Tercero Promiscuo Municipal Oralidad de Sabanalarga Atlántico, emitió providencia el 25 de enero de 2024, dentro de la acción de tutela de la referencia, por la vulneración del derecho fundamental al trabajo, providencia que concedió el amparo solicitado y ordenó al ente accionado permitir el ingreso de los accionantes a las instalaciones de la Alcaldía de Sabanalarga para que presten los servicios en sus lugares de trabajo según lo establecido en los actos administrativos con los cuales fueron nombrados y posesionados. Esta decisión fue confirmada por la suscrita mediante sentencia de fecha 28 de febrero de 2024.

Ante el incumplimiento del fallo la parte actora instaura incidente de desacato en contra del Representante Legal del ente accionado, trámite el cual, una vez surtidas las distintas etapas procesales, se emite por parte del a quo providencia en la que sanciona al ALCALDE MUNICIPAL DE SABANALARGA ATLANTICO Dr. JOSE ELIAS CHAMS CHAMS con arresto de cinco (5) días y multa por valor de Dos (2) SMLMV, lo anterior al concluir que el incidentado no demostró el cumplimiento del fallo de tutela que amparó los derechos fundamentales de los accionantes.

CONSIDERACIONES

El incidente de desacato se encuentra regulado a partir del Artículo 52 del Decreto 2591 de 1991, el cuál dispone:

"ARTICULO 52.-Desacato. *La persona que incumpliere una orden de un juez proferida con base en el presente decreto incurrirá en desacato sancionable con arresto hasta de seis meses y multa hasta de 20 salarios mínimos mensuales, salvo que en este decreto ya se hubiere señalado una consecuencia jurídica distinta y sin perjuicio de las sanciones penales a que hubiere lugar. La sanción será impuesta por el mismo juez mediante el trámite incidental y será consultada al superior jerárquico, quien decidirá dentro de los tres días siguientes si debe revocarse la sanción.*

REF: CONSULTA INCIDENTE DE DESACATO
RAD. INTERNO: 2024-00005
JUZGADO DE ORIGEN: JUZGADO TERCERO PROMISCOU MUNICIPAL ORALIDAD DE SABANALARGA ATLANTICO
RAD. UNICO: 08638408900320240000302
ACCIONANTE: MARTHA CECILIA VARELA MATTOS, MARÍA DEL PILAR JULIO GÓMEZ, JUAN CAMILO AHUMADA RODRÍGUEZ, JULIANA LOZANO LÓPEZ, IVETH LUCÍA AHUMADA CERVANTES, OLINDA MERCEDES SARMIENTO BERDUGO, ANA JUSTINA GARCÍA REYES, GINA PAOLA PEÑA BLANCO Y JORGE LUIS PÁEZ SERJE
ACCIONADO: ALCALDE MUNICIPAL DE SABANALARGA ATLANTICO Dr. JOSÉ ELÍAS CHAMS CHAMS

La sanción será impuesta por el mismo juez mediante trámite incidental y será consultada al superior jerárquico quien decidirá dentro de los tres días siguientes si debe revocarse la sanción. La consulta se hará en el efecto devolutivo".

De igual manera, ha obtenido amplio desarrollo jurisprudencial a través de la Corte Constitucional, quien mediante distintos fallos interpreta los límites, deberes y facultades del juez de tutela al estudiar cada uno de los casos, es así como en fallo SU-034/18 dispuso:

"(iv) La jurisprudencia constitucional en relación con el incidente de desacato como mecanismo de carácter judicial para hacer cumplir los fallos de tutela

A partir de la creación de la acción de tutela por parte del Constituyente de 1991, el Decreto 2591 del mismo año reglamentó este mecanismo judicial para salvaguardar las garantías constitucionales de las personas, dotándolo de singulares atributos para lograr su efectiva implementación, habida cuenta de que "[l]a protección de los derechos fundamentales a través de la acción de tutela resultaría inocua, si no existieran mecanismos ágiles y oportunos, que conlleven la utilización de instrumentos de coacción para obligar a la autoridad pública o al particular que los ha vulnerado o amenazado desconocerlos, a hacer cesar la acción o la omisión que constituye la transgresión o afectación de aquéllos, en obediencia de las órdenes impartidas en los fallos proferidos por el juez de tutela."¹

Con este enfoque, en el artículo 24 del mencionado Decreto Estatutario el legislador dispuso que "el fallo que conceda la tutela tendrá por objeto garantizar al agraviado el pleno goce de su derecho, y volver al estado anterior a la violación, cuando fuere posible". Según esto, al cabo del trámite preferente y sumario que sigue la demanda de amparo constitucional, corresponde al juez competente emitir un fallo en el que (i) identifique al

¹ Sentencia T-554 de 1996, M.P.: Antonio Barrera Carbonell

REF: CONSULTA INCIDENTE DE DESACATO

RAD. INTERNO: 2024-00005

JUZGADO DE ORIGEN: JUZGADO TERCERO PROMISCOU MUNICIPAL ORALIDAD DE SABANALARGA ATLANTICO

RAD. UNICO: 08638408900320240000302

ACCIONANTE: MARTHA CECILIA VARELA MATTOS, MARÍA DEL PILAR JULIO GÓMEZ, JUAN CAMILO AHUMADA RODRÍGUEZ, JULIANA LOZANO LÓPEZ, IVETH LUCÍA AHUMADA CERVANTES, OLINDA MERCEDES SARMIENTO BERDUGO, ANA JUSTINA GARCÍA REYES, GINA PAOLA PEÑA BLANCO Y JORGE LUIS PÁEZ SERJE

ACCIONADO: ALCALDE MUNICIPAL DE SABANALARGA ATLANTICO Dr. JOSÉ ELÍAS CHAMS CHAMS

petionario y al sujeto de quien provenga la amenaza o vulneración; (ii) determine el derecho tutelado, (iii) imparta una orden y defina con precisión la conducta a cumplir con el fin de hacer efectivo el amparo, y (iv) fije un plazo perentorio para el cumplimiento de lo resuelto.

En el capítulo V del mismo decreto, dedicado a las Sanciones, se previó la figura del desacato como una infracción relacionada con el desobedecimiento a una providencia judicial dictada con ocasión de una acción de tutela, en los siguientes términos:

"Artículo 52. Desacato. La persona que incumpliere una orden de un juez proferida con base en el presente Decreto incurrirá en desacato sancionable con arresto hasta de seis meses y multa hasta de 20 salarios mínimos mensuales, salvo que en este decreto ya se hubiere señalado una consecuencia jurídica distinta y sin perjuicio de las sanciones penales a que hubiere lugar.

"La sanción será impuesta por el mismo juez mediante trámite incidental y será consultada al superior jerárquico quien decidirá dentro de los tres días siguientes si debe revocarse la sanción. ~~La consulta se hará en el efecto devolutivo.~~"²

Al momento de llevar a cabo el control abstracto de constitucionalidad sobre este precepto³, este Tribunal se refirió a la situación jurídica allí regulada y advirtió que se trataba de un trámite incidental especial –al cual no le resultaban aplicables las disposiciones adjetivas civiles sobre apelación de autos–, en el cual el grado jurisdiccional de consulta no se equiparaba a un medio de impugnación, sino que estaba encaminado a la verificación por parte del superior funcional del funcionario de conocimiento que, en caso de haberse impuesto sanciones, las mismas estuvieran correctamente impuestas.

² El aparte tachado fue declarado INEXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante sentencia C-243 de 1996, M.P.: Vladimiro Naranjo Mesa

³ Sentencia C-243 de 1996, M.P.: Vladimiro Naranjo Mesa

REF: CONSULTA INCIDENTE DE DESACATO

RAD. INTERNO: 2024-00005

JUZGADO DE ORIGEN: JUZGADO TERCERO PROMISCOU MUNICIPAL ORALIDAD DE SABANALARGA ATLANTICO

RAD. UNICO: 08638408900320240000302

ACCIONANTE: MARTHA CECILIA VARELA MATTOS, MARÍA DEL PILAR JULIO GÓMEZ, JUAN CAMILO AHUMADA RODRÍGUEZ, JULIANA LOZANO LÓPEZ, IVETH LUCÍA AHUMADA CERVANTES, OLINDA MERCEDES SARMIENTO BERDUGO, ANA JUSTINA GARCÍA REYES, GINA PAOLA PEÑA BLANCO Y JORGE LUIS PÁEZ SERJE

ACCIONADO: ALCALDE MUNICIPAL DE SABANALARGA ATLANTICO Dr. JOSÉ ELÍAS CHAMS CHAMS

En la misma oportunidad, la Corte sostuvo que “[l]a facultad del juez de imponer la sanción por el incumplimiento de tal orden [dictada dentro del trámite de la acción de tutela], debe entenderse inmersa dentro del contexto de sus poderes disciplinarios, asimilables a los que le concede al juez civil el numeral 2o. del artículo 39 del Código de Procedimiento Civil”; poderes correccionales justificados por el deber del juez de dirigir el desarrollo del proceso y por razones de interés público que van más allá del conflicto entre las partes. Concluyó, así, que “los poderes disciplinarios del juez, revisten un carácter correccional o punitivo, asimilable a la sanción de tipo penal”, según una interpretación armónica de los artículos 27 y 53 del mismo Decreto 2591 de 1991, al tenor del cual el incumplimiento al fallo de tutela podría llegar a tipificarse como el delito de fraude a resolución judicial, independientemente de la responsabilidad derivada del desacato.

Pues bien: cuando el sujeto o autoridad responsable del agravio no da cumplimiento a lo resuelto dentro del término estipulado, el juez que obró como autoridad de primera instancia⁴ está llamado a hacer acatar la orden con el fin de garantizar la efectividad del derecho protegido, para lo cual puede, además de adoptar las medidas para propiciar el cumplimiento – conforme a lo previsto en el artículo 27 del Decreto 2591 de 1991–⁵, tramitar el incidente de desacato contra el obligado que se muestre renuente a la observancia del fallo, tal como, desde muy temprano, lo ha reconocido la jurisprudencia constitucional:

⁴ La jurisprudencia constitucional ha sido enfática en resaltar que la competencia para hacer cumplir los fallos de tutela radica, *prima facie*, en cabeza de los jueces de primera instancia, pues son estos los encargados de hacer cumplir las órdenes impartidas, así provengan de un fallo de segunda instancia o de una sentencia de revisión emanada de la Corte Constitucional que haya resuelto revocar lo inicialmente dispuesto. De esta manera, en Auto 136A de 2002, esta Corporación destacó que la competencia principal del juez de primera instancia para asegurar el cumplimiento de las distintas sentencias de tutela: “(i) Obedece a una interpretación sistemática del decreto 2591 de 1991, (ii) genera claridad en términos de seguridad jurídica, al desarrollar el principio de igualdad en los procedimientos judiciales, (iii) esta (sic) en armonía con el principio de inmediación del trámite de tutela y, (iv) protege la eficacia de la garantía procesal en que consiste el grado jurisdiccional de consulta”. Cfr. Sentencias SU-1158 de 2003, T-421 de 2003, T-368 de 2005 T-271 de 2015 y T-226 de 2016.

⁵ Sobre los rasgos que diferencia el trámite del cumplimiento del incidente de desacato, se ha dicho: “[L]a facultad para sancionar por desacato es una opción que tiene el juez frente al incumplimiento pero no puede confundirse en manera alguna con la potestad que tiene para hacer efectiva la orden de tutela. Es decir, el juez puede adelantar el incidente de desacato y sancionar a o los responsables y simultáneamente puede adelantar las diligencias tendentes a obtener el cumplimiento de la orden. Un trámite no excluye al otro y de igual manera la competencia para hacer efectivo el cumplimiento de la orden no es requisito necesario ni previo para poder imponer la sanción.” Sentencia T-459 de 2003, M.P.: Jaime Córdoba Triviño

REF: CONSULTA INCIDENTE DE DESACATO

RAD. INTERNO: 2024-00005

JUZGADO DE ORIGEN: JUZGADO TERCERO PROMISCOU MUNICIPAL ORALIDAD DE SABANALARGA ATLANTICO

RAD. UNICO: 08638408900320240000302

ACCIONANTE: MARTHA CECILIA VARELA MATTOS, MARÍA DEL PILAR JULIO GÓMEZ, JUAN CAMILO AHUMADA RODRÍGUEZ, JULIANA LOZANO LÓPEZ, IVETH LUCÍA AHUMADA CERVANTES, OLINDA MERCEDES SARMIENTO BERDUGO, ANA JUSTINA GARCÍA REYES, GINA PAOLA PEÑA BLANCO Y JORGE LUIS PÁEZ SERJE

ACCIONADO: ALCALDE MUNICIPAL DE SABANALARGA ATLANTICO Dr. JOSÉ ELÍAS CHAMS CHAMS

"El sistema jurídico tiene prevista una oportunidad y una vía procesal específica para obtener que los fallos de tutela se cumplan y para provocar que, en caso de no ser obedecidos, se apliquen sanciones a los responsables, las que pueden ser pecuniarias o privativas de la libertad, según lo contemplan los artículos 52 y 53 del Decreto 2591 de 1991. El incidente respectivo, al que se ha referido esta Corporación en varios fallos, tiene lugar precisamente sobre la base de que alguien alegue ante el juez competente que lo ordenado por la autoridad judicial con miras al amparo de los derechos fundamentales no se ha ejecutado, o se ha ejecutado de manera incompleta o tergiversando la decisión del fallador."⁶

La tarea del juez que instruye un incidente de desacato consiste, entonces, en examinar si la orden proferida para la protección de un derecho fundamental fue cumplida, o no, por su destinatario, en la forma prevista en la respectiva decisión judicial⁷. Esto excluye que en el trámite del desacato puedan hacerse valoraciones o juicios que hayan sido objeto de debate en el respectivo proceso de tutela, pues ello implicaría reabrir una controversia que ya ha concluido, en detrimento de la seguridad jurídica y el principio de cosa juzgada⁸.

En este orden de ideas, la autoridad que adelanta el incidente de desacato se debe limitar a verificar los siguientes aspectos: (i) a quién se dirigió la orden, (ii) en qué término debía ejecutarse, (iii) el alcance de la misma, (iv) si efectivamente existió incumplimiento parcial o integral de la orden dictada en la sentencia, y de ser el caso (v) cuáles fueron las razones por las que el accionado no obedeció lo ordenado dentro del proceso⁹.

Empero, esta Corporación ha admitido en determinados eventos la posibilidad de que el juez instructor del desacato module las órdenes de tutela –

⁶ Sentencia T-088 de 1999, M.P.: José Gregorio Hernández Galindo

⁷ Sentencia T-014 de 2009, M.P.: Nilson Pinilla Pinilla

⁸ Sentencias T-188 de 2002, M.P.: Alfredo Beltrán Sierra, T-421 de 2003, M.P.: Marco Gerardo Monroy Cabra y T-512 de 2011, M.P.: Jorge Iván Palacio Palacio

⁹ Sentencia T-509 de 2013, M.P.: Nilson Pinilla Pinilla

REF: CONSULTA INCIDENTE DE DESACATO

RAD. INTERNO: 2024-00005

JUZGADO DE ORIGEN: JUZGADO TERCERO PROMISCOU MUNICIPAL ORALIDAD DE SABANALARGA ATLANTICO

RAD. UNICO: 08638408900320240000302

ACCIONANTE: MARTHA CECILIA VARELA MATTOS, MARÍA DEL PILAR JULIO GÓMEZ, JUAN CAMILO AHUMADA RODRÍGUEZ, JULIANA LOZANO LÓPEZ, IVETH LUCÍA AHUMADA CERVANTES, OLINDA MERCEDES SARMIENTO BERDUGO, ANA JUSTINA GARCÍA REYES, GINA PAOLA PEÑA BLANCO Y JORGE LUIS PÁEZ SERJE

ACCIONADO: ALCALDE MUNICIPAL DE SABANALARGA ATLANTICO Dr. JOSÉ ELÍAS CHAMS CHAMS

particularmente tratándose de órdenes complejas¹⁰ en tanto no pueden materializarse inmediatamente y precisan del concurso de varios sujetos o entidades (v.gr. asuntos de política pública)– en el sentido de que incluya una orden adicional a la principal o modifique la misma en sus aspectos accidentales –es decir, en lo relacionado con las condiciones de tiempo, modo y lugar–, siempre y cuando ello sea imprescindible para asegurar el goce efectivo de los derechos fundamentales amparados en sede de tutela, respetando el principio de cosa juzgada y sin alterar el contenido esencial de lo decidido originalmente, de conformidad con los siguientes parámetros o condiciones de hecho¹¹:

- (a) Porque la orden original nunca garantizó el goce efectivo del derecho fundamental tutelado, o lo hizo en un comienzo, pero luego devino inane;*
- (b) Porque implica afectar de forma grave, directa, cierta, manifiesta e inminente el interés público –caso en el cual el juez que resuelve modificar la orden primigenia debe buscar la menor reducción posible de la protección concedida y compensar dicha reducción de manera inmediata y eficaz–;*
- (c) Porque es evidente que lo ordenado siempre será imposible de cumplir.*

Por otra parte, en el proceso de verificación que adelanta el juez del desacato, es menester analizar, conforme al principio constitucional de buena fe, si el

¹⁰ “[U]na orden de tutela es simple cuando comprende una sola decisión de hacer o de abstenerse de hacer algo que se encuentra dentro de la órbita de control exclusivo de la persona destinataria de la orden y se puede adoptar y ejecutar en corto tiempo, usualmente mediante una sola decisión o acto. Por el contrario una orden de tutela es compleja cuando conlleva un conjunto de acciones u omisiones que sobrepasan la órbita de control exclusivo de la persona destinataria de la orden, y, con frecuencia, requieren de un plazo superior a 48 horas para que el cumplimiento sea pleno.

“La posibilidad de alterar las órdenes impartidas originalmente dentro de un proceso de tutela, tiene sentido, en especial, cuando el juez adoptó una orden compleja para asegurar el goce efectivo de un derecho. En estas situaciones el remedio adoptado suele enmarcarse dentro de una política pública del estado y puede significar plazos, diseños de programas, apropiación de recursos, elaboración de estudios o demás actividades que no puedan realizarse de forma inmediata y escapan al control exclusivo de la persona destinataria de la orden original. En ocasiones, por ejemplo, el juez de tutela se ve obligado a vincular a un proceso a varias autoridades administrativas, e incluso a particulares, para que todas las personas, conjuntamente, logren adoptar una serie de medidas necesarias para salvaguardar el goce efectivo del derecho”. Sentencia T-086 de 2003, M.P.: Manuel José Cepeda Espinosa

¹¹ Sentencias T-086 de 2003, M.P.: Manuel José Cepeda Espinosa y T-1113 de 2005, M.P.: Jaime Córdoba Triviño

REF: CONSULTA INCIDENTE DE DESACATO

RAD. INTERNO: 2024-00005

JUZGADO DE ORIGEN: JUZGADO TERCERO PROMISCOU MUNICIPAL ORALIDAD DE SABANALARGA ATLANTICO

RAD. UNICO: 08638408900320240000302

ACCIONANTE: MARTHA CECILIA VARELA MATTOS, MARÍA DEL PILAR JULIO GÓMEZ, JUAN CAMILO AHUMADA RODRÍGUEZ, JULIANA LOZANO LÓPEZ, IVETH LUCÍA AHUMADA CERVANTES, OLINDA MERCEDES SARMIENTO BERDUGO, ANA JUSTINA GARCÍA REYES, GINA PAOLA PEÑA BLANCO Y JORGE LUIS PÁEZ SERJE

ACCIONADO: ALCALDE MUNICIPAL DE SABANALARGA ATLANTICO Dr. JOSÉ ELÍAS CHAMS CHAMS

conminado a cumplir la orden se encuentra inmerso en una circunstancia excepcional de fuerza mayor, caso fortuito o imposibilidad absoluta jurídica o fáctica para conducir su proceder según lo dispuesto en el fallo de tutela. Bajo esa óptica, no habría lugar a imponer una sanción por desacato en los casos en que (i) la orden de tutela no ha sido precisa, porque no se determinó quién debía cumplirla o porque su contenido es difuso, y/o (ii) el obligado ha adoptado alguna conducta positiva tendiente a cumplir la orden de buena fe, pero no se le ha dado la oportunidad de hacerlo¹².

En este contexto cobra vertebral importancia un juicio adecuado en torno a la responsabilidad subjetiva en cabeza del destinatario de la orden de tutela, pues no basta con constatar el incumplimiento o el cumplimiento defectuoso para dar por supuesta una actitud indolente por parte del mismo¹³. Es por esto que se ha sostenido que "al ser el desacato un mecanismo de coerción que surge en virtud de las facultades disciplinaria de los jueces a partir de las cuales pueden imponer sanciones consistentes en multas o arresto, éstas tienen que seguir los principios del derecho sancionador"¹⁴.

De allí se desprende que corresponde a la autoridad competente verificar si efectivamente existe una responsabilidad subjetiva en el incumplimiento de la orden judicial –lo que, a su vez, conlleva examinar si se da un nexo causal fundado en la culpa o el dolo entre el comportamiento del demandado y el resultado¹⁵– pues si no hay contumacia o negligencia comprobadas –se insiste– no puede presumirse la responsabilidad por el solo hecho del incumplimiento y, por lo tanto, no es procedente la sanción¹⁶.

¹² Sentencias T-368 de 2005, M.P.: Clara Inés Vargas Hernández, T-1113 de 2005, M.P.: Jaime Córdoba Triviño, T-171 de 2009, M.P.: Humberto Antonio Sierra Porto

¹³ Tal ha sido la línea definida por la Corte de tiempo atrás: "Es pues el desacato un ejercicio del poder disciplinario y por lo mismo la responsabilidad de quien incurra en aquel es una responsabilidad subjetiva. Es decir que debe haber negligencia comprobada de la persona para el incumplimiento del fallo, no pudiendo presumirse la responsabilidad por el solo hecho del incumplimiento." Sentencia T-763 de 1998, M.P.: Alejandro Martínez Caballero

¹⁴ Sentencia T-171 de 2009, M.P.: Humberto Antonio Sierra Porto

¹⁵ Sentencia T-889 de 2011, M.P.: Jorge Iván Palacio Palacio

¹⁶ Sobre la **responsabilidad subjetiva** por parte del obligado en el trámite de incidente de desacato, la Corte ha fijado un precedente pacífico: sentencias T-763 de 1998, M.P.: Alejandro Martínez Caballero, T-553 de 2002, M.P.: Alfredo Beltrán Sierra, T-458 de 2003, M.P.: Marco Gerardo Monroy Cabra, T-459 de 2003, M.P.: Jaime Córdoba Triviño, T-744 de 2003, M.P.: Marco Gerardo Monroy Cabra, T-939 de 2005, M.P.: Clara Inés Vargas Hernández, T-1113 de 2005, M.P.: Jaime Córdoba Triviño, T-632 de 2006, M.P.: Marco Gerardo Monroy Cabra, T-1243 de 2008, M.P.: Rodrigo Escobar Gil, T-171 de 2009, M.P.: Humberto Antonio Sierra Porto, T-123 de 2010, M.P.: Luis Ernesto Vargas Silva, T-652 de 2010, M.P.: Jorge Iván Palacio Palacio, T-512 de 2011,

REF: CONSULTA INCIDENTE DE DESACATO

RAD. INTERNO: 2024-00005

JUZGADO DE ORIGEN: JUZGADO TERCERO PROMISCOU MUNICIPAL ORALIDAD DE SABANALARGA ATLANTICO

RAD. UNICO: 08638408900320240000302

ACCIONANTE: MARTHA CECILIA VARELA MATTOS, MARÍA DEL PILAR JULIO GÓMEZ, JUAN CAMILO AHUMADA RODRÍGUEZ, JULIANA LOZANO LÓPEZ, IVETH LUCÍA AHUMADA CERVANTES, OLINDA MERCEDES SARMIENTO BERDUGO, ANA JUSTINA GARCÍA REYES, GINA PAOLA PEÑA BLANCO Y JORGE LUIS PÁEZ SERJE

ACCIONADO: ALCALDE MUNICIPAL DE SABANALARGA ATLANTICO Dr. JOSÉ ELÍAS CHAMS CHAMS

En la misma línea, es constante y reiterada la jurisprudencia constitucional en el sentido de que, por inscribirse en el ejercicio del poder jurisdiccional sancionatorio, la vía incidental del desacato exige una plena observancia del debido proceso, por lo que el juez instructor debe respetar las garantías de los involucrados y concentrarse en determinar en estricto derecho lo relativo al cumplimiento, toda vez que "[s]i el incidente de desacato finaliza con decisión condenatoria, puede haber vía de hecho si no aparece la prueba del incumplimiento, o no hay responsabilidad subjetiva", al paso que "[s]i el auto que decide el desacato absuelve al inculpado, se puede incurrir en vía de hecho si la absolución es groseramente ilegal."¹⁷

La garantía del debido proceso en el marco del trámite incidental del desacato, ha sido caracterizada por vía jurisprudencial en los siguientes términos:

"[N]o puede olvidarse que la observancia del debido proceso es perentoria durante el trámite incidental, lo cual presume que el juez, sin desconocer que debe tramitarse al igual que la tutela de manera expedita, no puede descuidar la garantía del derecho al debido proceso y el derecho de defensa. Debe (1) comunicar al incumplido sobre la iniciación del mismo y darle la oportunidad para que informe la razón por la cual no ha dado cumplimiento a la orden y presente sus argumentos de defensa. Es preciso decir que el responsable podrá alegar dificultad grave para cumplir la orden, pero sólo en el evento en que ella sea absolutamente de imposible cumplimiento, lo cual debe demostrar por cualquier medio probatorio; así mismo, debe (2) practicar las pruebas que se le soliciten y las que considere conducentes son indispensables para adoptar la

M.P.: Jorge Iván Palacio Palacio, T-606 de 2011, M.P.: Humberto Antonio Sierra Porto, T-889 de 2011, M.P.: Jorge Iván Palacio Palacio, T-010 de 2012, M.P.: Jorge Iván Palacio Palacio, T-074 de 2012, M.P.: Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, T-280A de 2012, M.P.: Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, T-527 de 2012, M.P.: Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, T-1090 de 2012, M.P.: Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, T-185 de 2013, M.P.: Luis Ernesto Vargas Silva, T-399 de 2013, M.P.: Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, T-482 de 2013, M.P.: Alberto Rojas Ríos, T-254 de 2014, M.P.: Luis Ernesto Vargas Silva, C-367 de 2014, M.P.: Mauricio González Cuervo, T-271 de 2015, M.P.: Jorge Iván Palacio Palacio, T-325 de 2015, M.P.: Luis Guillermo Guerrero Pérez, T-226 de 2016, M.P.: Luis Ernesto Vargas Silva, T-280 de 2017, M.P.: José Antonio Cepeda Amarís.

¹⁷ Sentencia T-458 de 2003, M.P.: Marco Gerardo Monroy Cabra

REF: CONSULTA INCIDENTE DE DESACATO

RAD. INTERNO: 2024-00005

JUZGADO DE ORIGEN: JUZGADO TERCERO PROMISCOU MUNICIPAL ORALIDAD DE SABANALARGA ATLANTICO

RAD. UNICO: 08638408900320240000302

ACCIONANTE: MARTHA CECILIA VARELA MATTOS, MARÍA DEL PILAR JULIO GÓMEZ, JUAN CAMILO AHUMADA RODRÍGUEZ, JULIANA LOZANO LÓPEZ, IVETH LUCÍA AHUMADA CERVANTES, OLINDA MERCEDES SARMIENTO BERDUGO, ANA JUSTINA GARCÍA REYES, GINA PAOLA PEÑA BLANCO Y JORGE LUIS PÁEZ SERJE

ACCIONADO: ALCALDE MUNICIPAL DE SABANALARGA ATLANTICO Dr. JOSÉ ELÍAS CHAMS CHAMS

decisión; (3) notificar la decisión; y, en caso de que haya lugar a ello, (4) remitir el expediente en consulta ante el superior.”¹⁸

Acerca de la finalidad que persigue el incidente de desacato, la postura que de vieja data ha acogido la Sala Plena de esta Corte y que se ha mantenido es que, si bien una de las consecuencias derivadas de este trámite incidental es la imposición de sanciones por la desobediencia frente a la sentencia, su auténtico propósito es lograr el cumplimiento efectivo de la orden de tutela pendiente de ser ejecutada¹⁹; de suerte que no se persigue reprimir al renuente por el peso de la sanción en sí misma²⁰, sino que ésta debe entenderse como una forma para inducir que aquel encauce su conducta hacia el cumplimiento, a través de una medida de reconvención cuya objetivo no es otro que auspiciar la eficacia de la acción impetrada y, con ella, la reivindicación de los derechos quebrantados²¹.

En consecuencia, cuando en el curso del incidente de desacato el accionado se persuade a cumplir la orden de tutela, no hay lugar a la imposición y/o aplicación de la sanción:

“[L]a imposición o no de una sanción dentro del incidente puede implicar que el accionado se persuada o no del cumplimiento de una sentencia. En efecto, en caso de que se inicie el incidente de desacato y el accionado, reconociendo que se ha desacatado lo ordenado por el juez de tutela, quiera evitar la sanción, deberá acatar la sentencia.

“En caso de que se haya adelantado todo el trámite y resuelto sancionar por desacato, para que la sanción no se haga efectiva, el renuente a cumplir podrá evitar ser sancionado acatando.”²²

¹⁸ Sentencia T-459 de 2003, M.P.: Jaime Córdoba Triviño

¹⁹ Sentencias C-092 de 1997, M.P.: Carlos Gaviria Díaz y C-367 de 2014, M.P.: Mauricio González Cuervo

²⁰ Sentencias T-421 de 2003, M.P.: Marco Gerardo Monroy Cabra, T-368 de 2005, M.P.: Clara Inés Vargas Hernández, T-1113 de 2005, M.P.: Jaime Córdoba Triviño, T-171 de 2009, M.P.: Humberto Antonio Sierra Porto, T-652 de 2010, M.P.: Jorge Iván Palacio Palacio, T-512 de 2011, M.P.: Jorge Iván Palacio Palacio, T-074 de 2012, M.P.: Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, T-280A de 2012, M.P.: Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, T-482 de 2013, M.P.: Alberto Rojas Ríos, C-367 de 2014, M.P.: Mauricio González Cuervo,

²¹ Sobre la naturaleza de la sanción por desacato se pronunció la Corte Constitucional en la sentencia C-092 de 1997, M.P.: Carlos Gaviria Díaz

²² Sentencias T-421 de 2003, M.P.: Marco Gerardo Monroy Cabra, T-171 de 2009, M.P.: Humberto Antonio Sierra Porto, T-652 de 2010, M.P.: Jorge Iván Palacio Palacio, T-463 de 2011, M.P.: Nilson Pinilla Pinilla,

REF: CONSULTA INCIDENTE DE DESACATO

RAD. INTERNO: 2024-00005

JUZGADO DE ORIGEN: JUZGADO TERCERO PROMISCUO MUNICIPAL ORALIDAD DE SABANALARGA ATLANTICO

RAD. UNICO: 08638408900320240000302

ACCIONANTE: MARTHA CECILIA VARELA MATTOS, MARÍA DEL PILAR JULIO GÓMEZ, JUAN CAMILO AHUMADA RODRÍGUEZ, JULIANA LOZANO LÓPEZ, IVETH LUCÍA AHUMADA CERVANTES, OLINDA MERCEDES SARMIENTO BERDUGO, ANA JUSTINA GARCÍA REYES, GINA PAOLA PEÑA BLANCO Y JORGE LUIS PÁEZ SERJE

ACCIONADO: ALCALDE MUNICIPAL DE SABANALARGA ATLANTICO Dr. JOSÉ ELÍAS CHAMS CHAMS

Puede así presentarse una situación en la cual se evidencia la falta de ejecución de la orden de tutela sin que la subsistencia de la amenaza o vulneración pueda enrostrársele al accionado, caso en el cual el juez constitucional –que mantiene su competencia hasta que los derechos amparados sean restablecidos– deberá recurrir a otros métodos que propicien el cumplimiento efectivo sin que haya lugar a amonestar al extremo pasivo. En esa dirección, esta Corte ha subrayado: “todo desacato implica incumplimiento, pero no todo incumplimiento conlleva a un desacato’ ya que puede ocurrir que el juez de tutela constate, de forma objetiva, la falta de acatamiento de la sentencia de tutela pero ello no se deba a la negligencia del obligado -responsabilidad subjetiva-. En este caso, no habría lugar a la imposición de las sanciones previstas para el desacato sino a la adopción de ‘todas las medidas necesarias para el cabal cumplimiento’ del fallo de tutela mediante un trámite de cumplimiento.”²³

Ahora bien: en el evento de que, tras comprobar el hecho objetivo del incumplimiento aunado a la responsabilidad subjetiva del obligado, el juez resuelva imponer las sanciones por desacato de arresto y/o multa previstas en el artículo 52 del Decreto 2591 de 1991, la decisión debe ser revisada por el superior funcional en grado jurisdiccional de consulta, el cual, como ya se anticipaba ut supra, no se trata de un recurso que se presente a petición de parte, sino de un control que opera automáticamente, con el fin de que la autoridad de nivel superior establezca la legalidad de la decisión adoptada por el inferior²⁴.

Al evaluar el alcance de la decisión del juez que resuelve la consulta en el marco de un incidente de desacato, este Tribunal ha establecido que en esta etapa del trámite la autoridad competente deberá verificar los siguientes aspectos:

M.P.: Humberto Antonio Sierra Porto, T-606 de 2011, M.P.: Humberto Antonio Sierra Porto, T-010 de 2012, M.P.: Jorge Iván Palacio Palacio, T-074 de 2012, T-482 de 2013, M.P.: Alberto Rojas Ríos, M.P.: Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, T-509 de 2013, M.P.: Nilson Pinilla Pinilla, C-367 de 2014, M.P.: Mauricio González Cuervo.

²³ Sentencia T-606 de 2011, M.P.: Humberto Antonio Sierra Porto

²⁴ Cfr. C-055 de 1993 y T-421 de 2003.

REF: CONSULTA INCIDENTE DE DESACATO

RAD. INTERNO: 2024-00005

JUZGADO DE ORIGEN: JUZGADO TERCERO PROMISCUO MUNICIPAL ORALIDAD DE SABANALARGA ATLANTICO

RAD. UNICO: 08638408900320240000302

ACCIONANTE: MARTHA CECILIA VARELA MATTOS, MARÍA DEL PILAR JULIO GÓMEZ, JUAN CAMILO AHUMADA RODRÍGUEZ, JULIANA LOZANO LÓPEZ, IVETH LUCÍA AHUMADA CERVANTES, OLINDA MERCEDES SARMIENTO BERDUGO, ANA JUSTINA GARCÍA REYES, GINA PAOLA PEÑA BLANCO Y JORGE LUIS PÁEZ SERJE

ACCIONADO: ALCALDE MUNICIPAL DE SABANALARGA ATLANTICO Dr. JOSÉ ELÍAS CHAMS CHAMS

(i) si hubo incumplimiento y si este fue total o parcial, apreciando en ambos casos las circunstancias del caso concreto –la causa del incumplimiento– con el fin de identificar el medio adecuado para asegurar que se respete lo decidido.

(ii) si existe incumplimiento, deberá analizar si la sanción impuesta en el incidente de desacato es la correcta, en esta etapa, se corrobora que no haya una violación de la Constitución o de la Ley y que la sanción es adecuada, dadas las circunstancias específicas de cada caso, para alcanzar el fin que justifica la existencia misma de la acción de tutela, es decir, asegurar el goce efectivo del derecho tutelado por la sentencia.²⁵

A su vez, recordando que la finalidad última del incidente de desacato es la de hacer efectiva la protección de los derechos fundamentales objeto de amparo, la Corte ha admitido que en ciertas circunstancias el juez que conoce el grado jurisdiccional de consulta adicione lo resuelto por el a quo a través de medidas complementarias o ajustes tendientes a asegurar el cumplimiento de las órdenes de tutela, circunscrito eso sí a la parte resolutive de la sentencia de tutela, pues no es este el escenario para abrir el debate previamente clausurado.

En síntesis: el incidente de desacato es un instrumento procesal para garantizar el goce efectivo de los derechos fundamentales amparados mediante la acción de tutela, que tiene lugar cuando el obligado a cumplir una orden de tutela no lo hace. En este trámite incidental, el juez constitucional, en ejercicio de sus potestades disciplinarias, puede sancionar con arresto o multa a quien con responsabilidad subjetiva desatienda las órdenes judiciales encaminadas a restaurar el derecho vulnerado, lo cual debe efectuarse con plena observancia del debido proceso de los intervinientes y dentro de los márgenes trazados por la decisión de amparo.”

²⁵ Sentencia T-086 de 2003, M.P.: Manuel José Cepeda Espinosa

REF: CONSULTA INCIDENTE DE DESACATO

RAD. INTERNO: 2024-00005

JUZGADO DE ORIGEN: JUZGADO TERCERO PROMISCOU MUNICIPAL ORALIDAD DE SABANALARGA ATLANTICO

RAD. UNICO: 08638408900320240000302

ACCIONANTE: MARTHA CECILIA VARELA MATTOS, MARÍA DEL PILAR JULIO GÓMEZ, JUAN CAMILO AHUMADA RODRÍGUEZ, JULIANA LOZANO LÓPEZ, IVETH LUCÍA AHUMADA CERVANTES, OLINDA MERCEDES SARMIENTO BERDUGO, ANA JUSTINA GARCÍA REYES, GINA PAOLA PEÑA BLANCO Y JORGE LUIS PÁEZ SERJE

ACCIONADO: ALCALDE MUNICIPAL DE SABANALARGA ATLANTICO Dr. JOSÉ ELÍAS CHAMS CHAMS

SOLICITUD DE RECUSACION

La parte incidentada presentó memorial al despacho recusando a la suscrita, alegando que la misma se encuentra impedida para fallar la presente consulta por haber conocido la impugnación de la acción de tutela.

Considera el ente accionado que la suscrita juez incurre en la causal descrita en el art. 141 numeral 2º de la Ley 1564 de 2012 C.G.P., por lo cual aduce lo siguiente:

(...) la titular del Juzgado del Circuito Civil Escritural 001 de Sabanalarga, Dra. ANA ESTHER SULBARAN MARTINEZ, ya emitió su criterio sobre este asunto confirmando un fallo de tutela de segunda instancia en referencia y seguramente también confirmaría la sanción que en primera instancia profirió el Juzgado Tercero Promiscuo Municipal de Sabanalarga en contra del Alcalde Municipal de esta localidad, ya que habría un concepto preconcebido sobre este tema, y lo sano en este proceso es que la mentada juez se aparte del conocimiento y decisión del mismo con el propósito de que se garantice transparencia en su decisión."

Al respecto es menester traer a colación lo establecido en el Decreto 2591 de 1991, que regula el trámite de las acciones de tutela, el cual en su Artículo 39 dispone:

"ARTICULO 39.-Recusación. En ningún caso será procedente la recusación. El juez deberá declararse impedido cuando concurren las causales de impedimento del Código de Procedimiento Penal so pena de incurrir en la sanción disciplinaria correspondiente. El juez que conozca de la impugnación del fallo de tutela deberá adoptar las medidas procedentes para que se inicie el procedimiento disciplinario, si fuere el caso."

A su turno el Artículo 56 del Código de Procedimiento Penal Ley 906 de 2004, establece en el Numeral 6 y lo siguiente:

"ARTÍCULO 56. CAUSALES DE IMPEDIMENTO.

REF: CONSULTA INCIDENTE DE DESACATO

RAD. INTERNO: 2024-00005

JUZGADO DE ORIGEN: JUZGADO TERCERO PROMISCOU MUNICIPAL ORALIDAD DE SABANALARGA ATLANTICO

RAD. UNICO: 08638408900320240000302

ACCIONANTE: MARTHA CECILIA VARELA MATTOS, MARÍA DEL PILAR JULIO GÓMEZ, JUAN CAMILO AHUMADA RODRÍGUEZ, JULIANA LOZANO LÓPEZ, IVETH LUCÍA AHUMADA CERVANTES, OLINDA MERCEDES SARMIENTO BERDUGO, ANA JUSTINA GARCÍA REYES, GINA PAOLA PEÑA BLANCO Y JORGE LUIS PÁEZ SERJE

ACCIONADO: ALCALDE MUNICIPAL DE SABANALARGA ATLANTICO Dr. JOSÉ ELÍAS CHAMS CHAMS

(...)

6. Que el funcionario haya dictado la providencia de cuya revisión se trata, o hubiere participado dentro del proceso, o sea cónyuge o compañero o compañera permanente o pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o civil, o segundo de afinidad, del funcionario que dictó la providencia a revisar."

Por su parte, las distintas normativas que regulan el trámite y reparto de las apelaciones, indican lo siguiente: Primero, el numeral 3º del artículo 19 del Decreto Ley 1265 de 1970 estipula: "*Para el reparto de los negocios en las corporaciones se observarán las siguientes reglas: (...) 3. Cuando el negocio haya estado al conocimiento de la sala se adjudicará en el reparto al Magistrado que lo sustanció anteriormente*".

Así mismo, el numeral 5 del artículo 7 del Acuerdo 1472 de 2002 consagraba: "*Por adjudicación: **Cuando un asunto fuere repartido por primera vez en segunda instancia, en todas las ocasiones en que se interpongan recursos que deban ser resueltos por el superior funcional, el negocio será asignado a quien se le repartió inicialmente.***"

De igual manera, el artículo 6 del Acuerdo PSAA15-10443 de 16-12-2015, dispuso en su momento: "*(...) Cuando se concentre la apelación de autos proferidos en una audiencia, o se concentre la apelación de autos y de una sentencia o de varias de éstas, **todas las apelaciones se repartirán a un mismo juez o Magistrado, o al juez o Magistrado al que previamente se le había asignado el conocimiento del proceso, (...)***". En el mismo sentido, se manifiesta en el artículo 10 del Acuerdo PCSJA17-10715 de 25-07-2017.

Recientemente en fallo T-432 de 2022 la alta corporación constitucional reiteró su línea jurisprudencial en relación con la conservación de la competencia por el conocimiento previo dentro del trámite de las acciones de tutela, incidentes de desacato y consultas, textualmente dispuso ese cuerpo colegiado lo siguiente:

"En cuanto a la competencia del juez de consulta para modificar o adicionar excepcionalmente las órdenes del fallo de tutela, también se dijo por esta

REF: CONSULTA INCIDENTE DE DESACATO

RAD. INTERNO: 2024-00005

JUZGADO DE ORIGEN: JUZGADO TERCERO PROMISCOU MUNICIPAL ORALIDAD DE SABANALARGA ATLANTICO

RAD. UNICO: 08638408900320240000302

ACCIONANTE: MARTHA CECILIA VARELA MATTOS, MARÍA DEL PILAR JULIO GÓMEZ, JUAN CAMILO AHUMADA RODRÍGUEZ, JULIANA LOZANO LÓPEZ, IVETH LUCÍA AHUMADA CERVANTES, OLINDA MERCEDES SARMIENTO BERDUGO, ANA JUSTINA GARCÍA REYES, GINA PAOLA PEÑA BLANCO Y JORGE LUIS PÁEZ SERJE

ACCIONADO: ALCALDE MUNICIPAL DE SABANALARGA ATLANTICO Dr. JOSÉ ELÍAS CHAMS CHAMS

*corporación que **"[s]on competentes para conocer de un incidente por desacato dentro de un proceso de acción de tutela, el juez al que le correspondió conocer la acción y el juez al que le correspondió resolver la impugnación, si la hubo.** Por lo tanto, es preciso concluir que cuando el juez de la consulta también conoció en segunda instancia de la acción de tutela, conserva la competencia especial en materia de órdenes y, por tanto, puede modificar en sede de consulta los aspectos accidentales de la orden que hubiese sido impartida en la sentencia, respetando los parámetros señalados anteriormente, con miras a asegurar el goce efectivo del derecho fundamental tutelado y previendo, además, las medidas compensatorias que sean necesarias. No ocurre lo mismo cuando el juez que resuelve la consulta no tuvo competencia sobre el caso y, en esa medida, no puede preservar ningún tipo de competencia especial en cuanto a poder establecer modificaciones al remedio ordenado. En los casos en que el funcionario judicial no tiene la competencia para modificar directamente la orden, pero al decidir la consulta lo considere necesario para garantizar el goce efectivo del derecho, deberá comunicárselo al juez de instancia el cuál puede y debe tomar la medida adecuada para el efecto"²⁶.*

Debido a lo anterior queda claro que la recusación interpuesta en primer lugar no es procedente por expresa disposición del artículo 39 del Decreto 2591 de 1991, sin embargo, la misma norma dispone textualmente que: "El juez deberá declararse impedido cuando concurren las causales de impedimento del Código de Procedimiento Penal", más no del Código General del Proceso como erradamente indica el incidentado.

No obstante, lo anterior, la causal del Código de Procedimiento Penal CPP Ley 906 de 2004, asimilada a la propuesta por el accionado para que la suscrita se declare impedida para fallar la consulta, sería la del numeral 6 la cual establece: (...) "**6. Que el funcionario haya dictado la providencia de cuya revisión se trata, o hubiere participado dentro del proceso"** (...), sin embargo, como se observó en las citas jurisprudenciales de la Honorable Corte Constitucional, el conocimiento previo de la impugnación de tutela faculta al juez para conocer de la eventual consulta del incidente de desacato, por lo tanto, la

²⁶ Sentencia T-086 de 2003.

REF: CONSULTA INCIDENTE DE DESACATO
RAD. INTERNO: 2024-00005
JUZGADO DE ORIGEN: JUZGADO TERCERO PROMISCOO MUNICIPAL ORALIDAD DE SABANALARGA ATLANTICO
RAD. UNICO: 08638408900320240000302
ACCIONANTE: MARTHA CECILIA VARELA MATTOS, MARÍA DEL PILAR JULIO GÓMEZ, JUAN CAMILO AHUMADA RODRÍGUEZ, JULIANA LOZANO LÓPEZ, IVETH LUCÍA AHUMADA CERVANTES, OLINDA MERCEDES SARMIENTO BERDUGO, ANA JUSTINA GARCÍA REYES, GINA PAOLA PEÑA BLANCO Y JORGE LUIS PÁEZ SERJE
ACCIONADO: ALCALDE MUNICIPAL DE SABANALARGA ATLANTICO Dr. JOSÉ ELÍAS CHAMS CHAMS

causal de impedimento anotada, no se configura en el presente asunto, como quiera que la suscrita le correspondió resolver la impugnación de la acción de tutela.

Además, que la providencia por medio de la cual se sanciona al incidentado la cual es objeto de revisión en esta instancia no fue dictada por la suscrita y la participación de esta funcionaria judicial dentro del proceso únicamente obedece a su ejercicio jurisdiccional, mas no en calidad de parte e interviniente, ni guarda relación de parentesco con la juez de primera instancia.

En mérito de lo anterior, será rechazada por improcedente la recusación propuesta por el incidentado.

CASO CONCRETO

Adentrándonos en el presente caso, tenemos que el asunto consiste en analizar si el accionado ha dado cumplimiento a lo ordenado en fallo de tutela de fecha 25 de enero de 2024, emitido por el JUZGADO TERCERO PROMISCOO MUNICIPAL ORALIDAD DE SABANALARGA ATLANTICO, en el cual se ordenó a la accionada lo siguiente:

"PRIMERO: TUTELAR el amparo constitucional de los derechos fundamentales al trabajo en condiciones dignas de los señores MARTHA CECILIA VARELA MATTOS, identificada con la cédula de ciudadanía No. 32.847.736 expedida en Sabanalarga – Atlántico, MARÍA DEL PILAR JULIO GÓMEZ, identificada con la cédula de ciudadanía No. 1.043.005.711 expedida en Sabanalarga – Atlántico, JUAN CAMILO AHUMADA RODRÍGUEZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.043.012.561 expedida en Sabanalarga – Atlántico, JULIANA LOZANO LÓPEZ, identificada con la cédula de ciudadanía No. 1.043.022.586 expedida en Sabanalarga – Atlántico, IVETH LUCÍA AHUMADA CERVANTES, identificada con la cédula de ciudadanía No. 32.851.892 expedida en Sabanalarga – Atlántico, OLINDA MERCEDES SARMIENTO BERDUGO, identificada con la cédula de ciudadanía No. 32.848.180 expedida en Sabanalarga – Atlántico, ANA JUSTINA GARCÍA REYES, identificada con la cédula de ciudadanía No. 32.854.480 expedida en Sabanalarga – Atlántico, GINA PAOLA PEÑA BLANCO, identificada con la

REF: CONSULTA INCIDENTE DE DESACATO

RAD. INTERNO: 2024-00005

JUZGADO DE ORIGEN: JUZGADO TERCERO PROMISCUO MUNICIPAL ORALIDAD DE SABANALARGA ATLANTICO

RAD. UNICO: 08638408900320240000302

ACCIONANTE: MARTHA CECILIA VARELA MATTOS, MARÍA DEL PILAR JULIO GÓMEZ, JUAN CAMILO AHUMADA RODRÍGUEZ, JULIANA LOZANO LÓPEZ, IVETH LUCÍA AHUMADA CERVANTES, OLINDA MERCEDES SARMIENTO BERDUGO, ANA JUSTINA GARCÍA REYES, GINA PAOLA PEÑA BLANCO Y JORGE LUIS PÁEZ SERJE

ACCIONADO: ALCALDE MUNICIPAL DE SABANALARGA ATLANTICO Dr. JOSÉ ELÍAS CHAMS CHAMS

cédula de ciudadanía No. 44.192.291 expedida en Sabanalarga – Atlántico y JORGE LUIS PÁEZ SERJE, identificado con la cédula de ciudadanía No. 8.640.152 expedida en Sabanalarga – Atlántico, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia., de conformidad con los planteamientos expuestos en la parte motiva del presente fallo.

SEGUNDO: ORDENAR a la ALCALDIA MUNICIPAL DE SABANALARGA, a través de su Representante Legal el señor JOSÉ ELÍAS CHAMS CHAMS, o quien haga sus veces, en el término perentorio de cuarenta y ocho (48) horas siguientes, contados a partir de la notificación de la presente decisión, permita el ingreso a los señores MARTHA CECILIA VARELA MATTOS, identificada con la cédula de ciudadanía No. 32.847.736 expedida en Sabanalarga – Atlántico, MARÍA DEL PILAR JULIO GÓMEZ, identificada con la cédula de ciudadanía No. 1.043.005.711 expedida en Sabanalarga – Atlántico, JUAN CAMILO AHUMADA RODRÍGUEZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.043.012.561 expedida en Sabanalarga – Atlántico, JULIANA LOZANO LÓPEZ, identificada con la cédula de ciudadanía No. 1.043.022.586 expedida en Sabanalarga – Atlántico, IVETH LUCÍA AHUMADA CERVANTES, identificada con la cédula de ciudadanía No. 32.851.892 expedida en Sabanalarga – Atlántico, OLINDA MERCEDES SARMIENTO BERDUGO, identificada con la cédula de ciudadanía No. 32.848.180 expedida en Sabanalarga – Atlántico, ANA JUSTINA GARCÍA REYES, identificada con la cédula de ciudadanía No. 32.854.480 expedida en Sabanalarga – Atlántico, GINA PAOLA PEÑA BLANCO, identificada con la cédula de ciudadanía No. 44.192.291 expedida en Sabanalarga – Atlántico y JORGE LUIS PÁEZ SERJE, identificado con la cédula de ciudadanía No. 8.640.152 expedida en Sabanalarga – Atlántico; y presten sus servicios en las instalaciones de sus lugares de trabajo según lo establecido en los actos administrativos con los cuales fueron nombrados y posesionados, y le permitan desarrollar sus funciones.”

La anterior decisión fue confirmada por este despacho judicial mediante sentencia del 28 de febrero de 2024, cuya parte resolutive es del siguiente tenor:

REF: CONSULTA INCIDENTE DE DESACATO

RAD. INTERNO: 2024-00005

JUZGADO DE ORIGEN: JUZGADO TERCERO PROMISCOU MUNICIPAL ORALIDAD DE SABANALARGA ATLANTICO

RAD. UNICO: 08638408900320240000302

ACCIONANTE: MARTHA CECILIA VARELA MATTOS, MARÍA DEL PILAR JULIO GÓMEZ, JUAN CAMILO AHUMADA RODRÍGUEZ, JULIANA LOZANO LÓPEZ, IVETH LUCÍA AHUMADA CERVANTES, OLINDA MERCEDES SARMIENTO BERDUGO, ANA JUSTINA GARCÍA REYES, GINA PAOLA PEÑA BLANCO Y JORGE LUIS PÁEZ SERJE

ACCIONADO: ALCALDE MUNICIPAL DE SABANALARGA ATLANTICO Dr. JOSÉ ELÍAS CHAMS CHAMS

"PRIMERO: CONFIRMAR la decisión proferida por el JUZGADO TERCERO PROMISCOU MUNICIPAL ORALIDAD DE SABANALARGA ATLANTICO, el 25 de enero de 2024, el cual concedió el amparo del derecho fundamental al trabajo en condiciones dignas, solicitado dentro de la presente acción de tutela interpuesta por MARTHA CECILIA VARELA MATTOS, MARÍA DEL PILAR JULIO GÓMEZ, JUAN CAMILO AHUMADA RODRÍGUEZ, JULIANA LOZANO LÓPEZ, IVETH LUCÍA AHUMADA CERVANTES, OLINDA MERCEDES SARMIENTO BERDUGO, ANA JUSTINA GARCÍA REYES, GINA PAOLA PEÑA BLANCO Y JORGE LUIS PÁEZ SERJE, contra el ALCALDE MUNICIPAL DE SABANALARGA ATLANTICO Dr. JOSÉ ELÍAS CHAMS CHAMS, lo anterior en atención a las razones expuestas en las consideraciones de este proveído.

SEGUNDO: Notifíquese a las partes y al Juzgado de primera instancia por el medio más expedito.

TERCERO: RECHAZAR de plano la solicitud de nulidad propuesta por la apoderada del ente territorial encartado, por carecer de legitimación para alegarla."

SOLICITUD DE REVOCATORIA DE LA SANCION IMPUESTA POR DESACATO – EXPEDICION DECRETO No. 037 DEL 4 DE MARZO DE 2024

La parte incidentada, posterior a la expedición del auto que decide el incidente de desacato en el que se le sanciona, allega memorial a este despacho en el que solicita que se revoque la sanción de arresto y multa, para ello anexa copia del Decreto No. 037 del 4 de marzo de 2024, "POR MEDIO DEL CUAL SE RESUELVE ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA" acto administrativo definitivo con el que el alcalde municipal de Sabanalarga Revoca los nombramientos realizados a los accionantes por el administrador municipal anterior.

En su parte motiva, expresa el citado acto administrativo que los citados nombramientos carecen de validez, se efectuaron contra las disposiciones legales, no fueron satisfechos los requisitos para su nombramiento en cuanto a la experiencia relacionada y demás inconsistencias detectadas, tales como carencia de disponibilidad presupuestal, la no creación de la Comisaria en la

REF: CONSULTA INCIDENTE DE DESACATO

RAD. INTERNO: 2024-00005

JUZGADO DE ORIGEN: JUZGADO TERCERO PROMISCOU MUNICIPAL ORALIDAD DE SABANALARGA ATLANTICO

RAD. UNICO: 08638408900320240000302

ACCIONANTE: MARTHA CECILIA VARELA MATTOS, MARÍA DEL PILAR JULIO GÓMEZ, JUAN CAMILO AHUMADA RODRÍGUEZ, JULIANA LOZANO LÓPEZ, IVETH LUCÍA AHUMADA CERVANTES, OLINDA MERCEDES SARMIENTO BERDUGO, ANA JUSTINA GARCÍA REYES, GINA PAOLA PEÑA BLANCO Y JORGE LUIS PÁEZ SERJE

ACCIONADO: ALCALDE MUNICIPAL DE SABANALARGA ATLANTICO Dr. JOSÉ ELÍAS CHAMS CHAMS

cual debieron ubicarse y la falta de concepto del Comité de vigilancia del acuerdo de reestructuración de pasivos en que se encuentra inmerso el municipio de Sabanalarga para modificar la planta de personal.

El alcalde municipal expresa la voluntad de la administración en el mentado acto administrativo previa apertura de una actuación administrativa en la cual recaudaron medios de prueba y de la cual participaron los accionantes. Este Decreto municipal fue comunicado a las accionantes de acuerdo a las constancias adjuntas.

La expedición del Decreto 037 del 4 de marzo de 2024, genera la aparición de una circunstancia sobreviniente en el presente asunto que imposibilita al incidentado jurídicamente el cumplimiento del fallo de tutela que amparó los derechos fundamentales de los accionantes, en la medida que si bien es cierto es la misma administración municipal quién con la expedición del acto administrativo revoca los Decretos por medio de los cuales fueron nombrados los incidentantes en los distintos cargos por el anterior alcalde, no es menos cierto que la expedición del nuevo acto administrativo se genera por la apertura de una actuación administrativa en la cual el administrador actual concluyó que los nombramientos realizados a los accionantes carecían de validez por violar las disposiciones legales entre otras circunstancias allí descritas.

Es menester aclarar que el acto administrativo Decreto 037 del 4 de marzo de 2024, aún no se encuentra ejecutoriado como quiera que fue recientemente expedido y notificado, además que es susceptible del respectivo medio de impugnación, y de ser el caso posteriormente demandado ante la jurisdicción contenciosa administrativa. También que en este trámite de consulta se escapa la posibilidad de realizar un juicio de legalidad del mismo, pues no es la oportunidad idónea y pertinente para realizarlo.

Por lo tanto, mal podría establecerse que con la expedición de dicho acto administrativo se configura la carencia actual de objeto, puesto que toda la actuación administrativa que ha sido centro de reproche a lo largo de esta acción de tutela puede ser atacada mediante mecanismos de defensa judiciales y administrativos, los cuales podrán ser iniciados por los accionantes.

REF: CONSULTA INCIDENTE DE DESACATO

RAD. INTERNO: 2024-00005

JUZGADO DE ORIGEN: JUZGADO TERCERO PROMISCOU MUNICIPAL ORALIDAD DE SABANALARGA ATLANTICO

RAD. UNICO: 08638408900320240000302

ACCIONANTE: MARTHA CECILIA VARELA MATTOS, MARÍA DEL PILAR JULIO GÓMEZ, JUAN CAMILO AHUMADA RODRÍGUEZ, JULIANA LOZANO LÓPEZ, IVETH LUCÍA AHUMADA CERVANTES, OLINDA MERCEDES SARMIENTO BERDUGO, ANA JUSTINA GARCÍA REYES, GINA PAOLA PEÑA BLANCO Y JORGE LUIS PÁEZ SERJE

ACCIONADO: ALCALDE MUNICIPAL DE SABANALARGA ATLANTICO Dr. JOSÉ ELÍAS CHAMS CHAMS

Así las cosas, la suscrita procederá a revocar la providencia dictada el 29 de febrero de 2024, por el JUZGADO TERCERO PROMISCOU MUNICIPAL ORALIDAD DE SABANALARGA ATLANTICO, mediante la cual impuso sanción y multa por desacato al ALCALDE MUNICIPAL DE SABANALARGA ATLANTICO Dr. JOSE ELIAS CHAMS CHAMS.

En mérito de lo expuesto el JUZGADO PRIMERO CIVIL DEL CIRCUITO DE SABANALARGA, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley;

RESUELVE:

PRIMERO: RECHAZAR por improcedente la recusación propuesta por el incidentado.

SEGUNDO: REVOCAR la decisión proferida por el JUZGADO TERCERO PROMISCOU MUNICIPAL ORALIDAD DE SABANALARGA ATLANTICO, dentro del incidente de desacato promovido por MARTHA CECILIA VARELA MATTOS, MARÍA DEL PILAR JULIO GÓMEZ, JUAN CAMILO AHUMADA RODRÍGUEZ, JULIANA LOZANO LÓPEZ, IVETH LUCÍA AHUMADA CERVANTES, OLINDA MERCEDES SARMIENTO BERDUGO, ANA JUSTINA GARCÍA REYES, GINA PAOLA PEÑA BLANCO Y JORGE LUIS PÁEZ SERJE, contra el ALCALDE MUNICIPAL DE SABANALARGA ATLANTICO Dr. JOSÉ ELÍAS CHAMS CHAMS, en el cual a este último se le impuso sanción y multa por incurrir en desacato a orden de tutela, y en su lugar se dispone; **ABSTENERSE** de sancionar a la parte incidentada, lo anterior conforme a lo expuesto en la parte motiva de este proveído.

TERCERO: Notifíquese a las partes, intervinientes y al juzgado de primera instancia por el medio más expedito y eficaz.

CUARTO: Por secretaria háganse las comunicaciones del caso de conformidad con el Artículo 8, 9 y 11 de la Ley 2213 de 2022, en concordancia con el Artículo 111 del C.G.P., y déjense las constancias en la plataforma TYBA con la inserción de la providencia respectiva, notifíquese la presente decisión por el estado electrónico de la Rama Judicial.

REF: CONSULTA INCIDENTE DE DESACATO
RAD. INTERNO: 2024-00005
JUZGADO DE ORIGEN: JUZGADO TERCERO PROMISCOO MUNICIPAL ORALIDAD DE SABANALARGA ATLANTICO
RAD. UNICO: 08638408900320240000302
ACCIONANTE: MARTHA CECILIA VARELA MATTOS, MARÍA DEL PILAR JULIO GÓMEZ, JUAN CAMILO AHUMADA
RODRÍGUEZ, JULIANA LOZANO LÓPEZ, IVETH LUCÍA AHUMADA CERVANTES, OLINDA MERCEDES SARMIENTO
BERDUGO, ANA JUSTINA GARCÍA REYES, GINA PAOLA PEÑA BLANCO Y JORGE LUIS PÁEZ SERJE
ACCIONADO: ALCALDE MUNICIPAL DE SABANALARGA ATLANTICO Dr. JOSÉ ELÍAS CHAMS CHAMS

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE



ANA ESTHER SULBARAN MARTINEZ

JUEZ

Firmado Por:

Ana Esther Sulbaran Martinez

Juez

Juzgado De Circuito

Promiscuo 001

Sabanalarga - Atlantico

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **ae9fb9c7e31ce5e21b1a63dd633c8ef9758519c35f93d792f2b28b7c938923d1**

Documento generado en 08/03/2024 01:53:49 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:

<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>